

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

DEMANDANTE	: DIANA EVA LÓPEZ GIRALDO
DEMANDADO	: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A., SKANDIA S.A. Y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-023-2020-00396-01
RADICADO INTERNO	: 046-23
DECISIÓN	: ADICIONA, ORDENA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 081

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

De conformidad con la sustitución del poder que se allega al correo electrónico, por parte de la Dra. SANDRA VIVIANA FONSECA CORREA (representante legal de la sociedad SKANDIA S.A.), se reconoce personería jurídica para representar los intereses de SKANDIA S.A., a la Dra. LUISA FERNANDA RENGIFO MEDINA, por cumplir los requisitos establecidos en los artículos 75 del CGP.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante, solicita se DECLARE la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual.

Se ORDENE a la sociedad SKANDIA S.A. a trasladar a Colpensiones, la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, frutos e intereses, cuota de administración.

Se ORDENE a PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. a devolver a Colpensiones, las cuotas de administración pro el tiempo que estuvo afiliada al Régimen de Ahorro Individual.

Se ORDENE a Colpensiones a activar la afiliación en el Régimen de Prima Media con las implicaciones legales que ello conlleva y a recibir las sumas devueltas por PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A.; y se condene en costas procesales.

Como fundamento fáctico de las pretensiones indicó que, nació el 21 de julio de 1967 y cuenta con 1.031,43 semanas cotizadas; el 3 de julio de 2001 cuando inició a laborar con la Rama Judicial, al llegar a la oficina de recursos humanos, le pasaron un formulario de PROTECCIÓN S.A. para que lo firmara a fin de proceder con su vinculación sin que hubiera un asesor presente; el 26 de junio de 2008 la visitó un asesor de COLFONDOS S.A. quien le indicó que este fondo estaba mejor posicionado que PROTECCIÓN S.A. y se trasladó; y el 12 de noviembre de 2017 su cuñado era asesor de la sociedad OLD MUTUAL hoy SKANDIA S.A., le sugirió el traslado a dicha entidad. Las sociedades PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. ni SKANDIA S.A., no le brindaron información adecuada, suficiente, clara, comprensible, oportuna y cierta para su traslado. La demandante le solicitó a los fondos de pensiones privados le remitieran información del estudio realizado al momento del traslado; PROTECCIÓN S.A. a la fecha de la demanda no dio respuesta clara y de fondo; COLFONDOS S.A. en comunicación del 27 de noviembre de 2019 le indicó que esa información se brinda a petición del interesado y no registra en el sistema información donde haya requerido recibir ese tipo de asesoría; y SKANDIA S.A. el 27 de enero de 2020 informó que la asesoría se dio de manera directa y personalizada; en la proyección solicita a SKANDIA S.A. informó que en la modalidad de retiro programado a los 57 años de edad su mesada sería de \$915.000; conforme la historia laboral, la demandante en el Régimen de Prima Media tendría una mesada pensional de \$4.597.063,60.

## **RESPUESTAS A LA DEMANDA**

**La sociedad COLFONDOS S.A. en su contestación** dice que no es cierto lo correspondiente al traslado a la AFP COLFONDOS S.A., porque la demandante suscribió formulario de afiliación con dicho fondo, de manera libre, voluntaria e informada y fue la demandante quien tomó la decisión de trasladarse; no es cierto que no le brindaron información adecuada, suficiente, clara y comprensible, porque la entidad ha capacitado a sus asesores en ambos regímenes pensiones. Es cierta la solicitud elevada a COLFONDOS S.A.. No le constan los demás hechos de la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, genérica, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual, ratificación de la afiliación del actor al fondo de pensiones obligatorias administrado por COLFONDOS S.A., prescripción de la acción para solicitar la nulidad del traslado, compensación y pago (expediente digital 08).

**La sociedad SKANDIA S.A.** se opuso a las pretensiones de la demanda. En relación a los hechos de la demanda, aceptó la fecha de nacimiento y las semanas cotizadas; el traslado realizado SKANDIA S.A., el cual es válido porque la asesoría que se realizó en 2017, se realizó conforme parámetros exigidos por la ley 100 de 1993; la solicitud elevada a SKANDIA S.A. y la respuesta dada por la entidad. No es cierto que no le hayan brindado información clara, suficiente, comprensible y oportuna. No le constan los demás hechos de la demanda. Propuso las excepciones de prescripción, buena fe, cobro de lo no debido por inexistencia de la obligación, genérica (expediente digital 09).

La sociedad SKANDIA S.A. solicitó vincular a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en virtud de los contratos de seguro previsional cuya vigencia son desde el año 2018. Exponiendo que desde el año 2018 la demandante está afiliada a SKANDIA S.A.; este fondo de pensiones en cumplimiento del art. 20 de la Ley 100 de 1993 suscribió contrato con la aseguradora un contrato de seguro previsional para cubrir los riesgos de invalidez y muerte; SKANDIA S.A. realizó los pagos correspondientes a las primas de seguros provisionales a favor de la aseguradora desde el 2018; SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS., trasladó a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, los conceptos dinerarios - primas- para el cubrimiento de los riesgos de invalidez y muerte de los

afiliados a su Fondo Obligatorio de Pensiones (entre ellos la Demandante), y que, por tanto, esta administradora ya no cuenta con dichos recursos, es necesaria la vinculación al presente trámite judicial de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A , toda vez que en caso de que se condene a devolver los aportes de la Demandada a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-, junto con los gastos de administración de los que trata el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, corresponde a la aludida aseguradora el cumplimiento de esa obligación en lo que se refiere, particularmente, a la prima pagada por el seguro previsional prenotado. (fl. 48 y siguientes, del expediente digital 09).

**PROTECCIÓN S.A. en la contestación** informó que es cierto el traslado a PROTECCIÓN S.A. el 3 de julio de 2001. No es cierto que para la vinculación a PROTECCIÓN S.A. le hayan pasado el formulario en la oficina de recursos humanos sin haber asesor presente, porque la política de la entidad al momento de la solicitud de traslado, es brindar una asesoría amplia, correcta, clara; que no le hayan informado las ventajas y desventajas del traslado, porque la accionante fue informada de manera objetiva e integral sobre las características del Régimen de Ahorro Individual en comparación con el Régimen de Prima Media. No le constan los demás hechos de la demanda.

Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restituciones mutuas en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, Inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, traslado de aportes, genérica (expediente digital 13).

**Colpensiones en su contestación** dijo que no es cierto el valor de la mesada pensional en el Régimen de Prima Media. No le consta las circunstancias narradas del traslado a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A., y SKANDIA S.A.; que no le hayan dado información clara, suficiente y completa del traslado de régimen. Aceptó lo demás hechos de la demanda. Se opuso a las pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de traslado entre regímenes pensionales, buena fe de

Colpensiones, prescripción, innominada, compensación, imposibilidad de condena en costas (expediente digital 14).

En auto del 16 de junio de 2021, el juzgado de conocimiento admitió el llamamiento en garantía realizado por la sociedad SKANDIA S.A. a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. (expediente digital 18). La aseguradora dio respuesta a los hechos de la demanda, señalando que no le constan y en lo referente a la mesada pensional en el Régimen de Prima Media, dijo que se trata de una especulación. Y frente a los hechos del llamamiento en garantía sostiene que su representada de buena fe expidió las pólizas de seguro previsional de invalidez, números 920140700002 y 9201411900149, que amparaban los riesgos de invalidez y muerte por evento común de los afiliados al fondo de pensiones obligatorias de SKANDIA S.A., en el entendimiento que esta administradora de pensiones daba cumplimiento oportuno y cabal a sus obligaciones para con sus afiliados; la demandante y demás afiliados a SKANDIA S.A. gozaron de la protección de las pólizas; SKANDIA realizó el pago correspondiente a las primas del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes a favor de MAPFRE por los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 y como consecuencia del pago de la prima del seguro previsional y al haber sido asumidos y amparados y correr por cuenta de MAPFRE los riesgos de invalidez y muerte de la totalidad de los afiliados de SKANDIA S.A, incluida la demandante, se devengó la totalidad de la prima, tal como lo señala el artículo 1070 del Código de Comercio; Con posterioridad al 31 de diciembre de 2018 SKANDIA S.A. no ha efectuado ningún pago de ninguna prima de seguro previsional a MAPFRE (expediente digital 35).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

En sentencia del 2 de diciembre de 2022, el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia de la afiliación a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A. de la demandante.

CONDENÓ a SKANDIA S.A. a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia traslade con destino a Colpensiones, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, los rendimientos, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexado.

CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. para que dentro del término de 30 días, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, traslade con destino a Colpensiones las cuotas de administración, primas previsionales y porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados, advirtiéndole a PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. que al momento de cumplir la orden impartida deberán remitir a Colpensiones, la claridad de los conceptos con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante.

CONDENÓ a Colpensiones, a recibir las sumas que le sean giradas por las sociedades PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A., las convierta a semanas efectivamente cotizadas por la demandante, teniendo por afiliada al Régimen de Prima Media sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral. Condenó en costas a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A.

### **IMPUGNACIÓN**

**La apoderada de SKANDIA S.A.** apela la sentencia al considerar que no se declare la ineficacia del traslado como se ordenó dado que la Corte Suprema de Justicia ha señalado que en estos procesos se debe verificar el contexto histórico que se generó al momento del traslado de régimen y en este caso se probó que PROTECCIÓN S.A. como primera administrado que generó el traslado, informó y fue más allá del deber legal que se le imponía de la firma del formulario y anexó un documento (el cual reconoció al demandante en su interrogatorio de parte), y reconoció que lo había suscrito y en ese documento se le informó que daba fe que estaba presente un agente comercial y se le brindó toda la información requerida y elevó proyección, por lo que no se debe sacar conclusiones diferentes a las que reposan en ese documento; ese documento indica que se le dio la información y se le debe dar validez por ser un documento que dentro de la audiencia fue decretada como prueba que se iba a tener en consideración para tomar una decisión y no se tachó de falso. Por lo que solicita se revoque la sentencia dado que ese documento acredita que se cumplió el deber de información.

Si se confirma la decisión de la ineficacia del traslado, solicita la revocatoria parcial del numeral segundo de la sentencia en donde se ordenó a SKANDIA S.A. a trasladar los gastos, primas de seguros y las sumas de manera indexadas, porque se materializó una ineficacia del traslado y dicha

consecuencia jurisprudencial, debe generar unos efectos que deben ser bajo los parámetros legales, y en ese sentido se debe ceñir a las normas que regulan los emolumentos que se deben trasladar, como es el art. 7º del Decreto 3995 de 2008 y en esa norma no se contempla que se generen frente a los gastos, primas ni que se den en forma indexada; y en cumplimiento del art. 20 de la Ley 100 de 1993, desde el 2009 hasta la fecha, la demandante ha estado afiliada y se ha realizado la correcta administración de los recursos de la cuenta de ahorro individual, y el 3% no está en las arcas de la entidad sino que se utilizó para la eficiente administración. Y solicita se revoque, la orden de trasladar las primas, al no estar contempladas en la norma enunciada, al ser pagadas a una aseguradora el cubrimiento de las posibles contingencias de invalidez y muerte.

En caso de ser confirmada la orden de trasladar los gastos y la prima, solicita que no se genere la indexación porque no se solicitó en la demanda, porque se estaría generando una decisión ultra y extrapetita lo que conlleva a violar el derecho de defensa de las accionadas; se estaría sancionando dos veces por el mismo hecho a su representada porque la entidad fue condenada al traslado de los rendimientos y al pago de la indexación; solicita se tenga en cuenta la figura de la compensación al haberse ordenado el traslado de los rendimientos; y considera que se genera un enriquecimiento sin justa causa; sustenta su recurso en sentencias del Tribunal de Cali en donde se revoca la indexación.

**La apoderada de PROTECCIÓN S.A.** apela la sentencia aduciendo que en el presente caso se reunieron los presupuestos facticos que trata la sentencia SL 812 de 2022 y en lo probado no se tacharon los documentos soporte y este caso tiene carácter diferencial en que desde el traslado realizado el 3 de julio de 2001, a la demandante se le realizó la proyección pensional sobre la diferencia de las mesadas que podía obtener en cada régimen y anexo al formulario, se ve la convalidación de la asesoría brindada y la demandante en el interrogatorio afirma haber firmado el documento y ese documento le advirtió a la demandante la edad en que se podía pensionar y dentro de los valores que relaciona de su posible mesada pensional es claro que es desventajoso el Régimen de Prima Media y pese a ello la demandante firmó el formulario de vinculación; con ello también se probó, que la accionada PROTECCIÓN S.A. cumplió con el deber de información, que alertó a la demandante sobre la desventaja de su afiliación y la desanimó al dar unos valores y con los valores

se demuestra que sería superior su pensión en el Régimen de Prima Media siendo suficiente para alertar las consecuencias de su decisión.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

**El apoderado de la parte demandante** solicita se confirme la sentencia, expresando que, frente al documento al que hacen referencia en la apelación, las accionadas SKANDIA y PROTECCIÓN S.A., la demandante en el interrogatorio de parte, únicamente reconoció el nombre y la firma pero desconoció la otra información al haber sido diligenciada sin su participación, y dicha afirmación que encuentra soporte, en un documento respecto del cual la apoderada de Skandia-Old Mutual no hizo mención y dejaría sin justificación dicha prueba relevante para demostrar la falta al consentimiento informado, el cual corresponde Certificado Electrónico de Tiempos Laborados -CETIL- NO. 202010890982301000070001 expedido el 02 de octubre de 2020 por el Municipio de Peque para efectos de hacer constar los tiempos servidos por la actora en dicha entidad territorial, desde el 01 de enero de 1987 hasta el 15 de enero de 1989, y del 08 de febrero de 1991 hasta el 08 de mayo de 1995, prueba con el que soporta la decisión el juez, de restar valor probatorio al documento o cuestionario formato “No afil 5771937” en el cual se registró que la demandante se vinculó a la vida laboral después del 30 de junio de 1995 y que no tiene derecho a bono, al ser claro que la demandante inició su vida laboral el 1º de enero de 1987 y tiene derecho al bono, por lo que el documento con el que se basa el sustento la apelación, contradice la verdad material y sustancial; aunado a lo anterior, los valores comparativos de la estimación pensional registrada en el formato “No afil 5771937” se basaron en información inexacta; frente a la importancia dada la sociedad Skandia- Old Mutual a las cifras registradas en el formato, resalta que la sentencia SL 4324 de 2022 habla de la obligación de ilustrar de las características, condiciones, acceso efectivo y riesgo de los regímenes sin que ello necesariamente se cumpla con una proyección. Sustenta sus alegatos en las sentencias SL 2611 de 2020, SL 5280 de 2021 y SL 1108 de 2022.

**La apoderada de SKANDIA S.A.** reitera lo dicho en el recurso de apelación y adiciona lo señalado, como sustento de la imposibilidad de trasladar los gastos de administración, lo señalado en el art. 36 del Decreto 692 de 1994 relativo a la distribución de las cotizaciones; que su representada actuó de buena fe y administró correctamente la cuenta de ahorro individual, y



conforme a lo señalado en la sentencia 25.307 de 2014 solo habría lugar a trasladar frutos percibidos; y la comisión de administración esta direccionada a retribuir las diferentes actividades que deben desarrollar las instituciones pensionales que conforman el Sistema General de Pensiones; y está acreditado que Skandia cumplió con generar una rentabilidad acorde a las directrices legales y de la Superintendencia Financiera.

Que igualmente hay imposibilidad de trasladar las primas de seguros previsionales por las mismas razones señaladas en la apelación, y sustenta lo señalado en el concepto 2019152169-003-000 del 15 de enero de 2020. Y asegura que la devolución crea un perjuicio económico a la sociedad que representa.

**La apoderada de Colpensiones** en sus extensos alegatos, solicita la revocatoria de la sentencia, argumentando en síntesis, que lo señalado que no comparte que los hechos de la demanda se traten de negaciones indefinidas lo que hace que no se altere la carga de la prueba, por lo tanto, la parte demandante debía demostrar la falta de información; que al tratarse de negaciones definidas, no configuran negaciones indefinidas, hay imposibilidad de hacer un análisis de lo dispuesto en el artículo 1604 del CC porque en esa disposición no se consagra una presunción de culpa; cuando la Corte Suprema de Justicia establece como regla, cuál debe ser el contenido de la información, se arroga una función que no le corresponde y contrario a ello, no existe un estándar de prueba determinado por el legislador, y considera que la Corte petrifica una regla mediante la cual se concluye que el formulario de afiliación acredita un consentimiento, pero no informado y ello lo sustenta con la aclaración al voto de la sentencia SL 1452 de 2019.

Sobre periodos mínimos de carencia y sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, trae a colación el art. 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 2º de la Ley 797 de 2003, el cual dispone sobre la libertad de elección del régimen, la sanción del art. 271 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia C 1024 de 2004, y con base en ello señala que en el presente caso se pretende el traslado habiendo cercanía a la edad mínima pensional, deduciéndose de acuerdo con las reglas de la sana crítica, específicamente las de la experiencia, que la finalidad de la parte actora es la búsqueda del reconocimiento de una prestación por vejez en el Régimen Solidario de Prima Media, sin que existan aportes al régimen pensional público que permitan la consolidación y proyección de un cálculo actuarial dentro, y sobre el acto

jurídico de traslado de régimen, debe imperar el efecto relativo de los contratos (Art. 1602 C.C.); resalta que en este asunto se trata de personas plenamente capaces sin que se observe vicios del consentimiento, la parte demandante actuó conforme a la autonomía de la voluntad, firmó el formulario, el cual se encuentra ajustado al art. 11 del Decreto 692 de 1994, no era beneficiaria del régimen de transición, por lo que no tenía una expectativa legítima o derecho adquirido, por lo que ello impide su retorno al RPM; el traslado entre regímenes pensionales encontrándose el afiliado a 10 años o menos de la edad mínima pensional, sólo se encuentra autorizado para los beneficiarios del régimen de transición, que accedieron a este por medio del tiempo de servicio o cotizaciones (Corte Constitucional, sentencias C-789 de 2002, SU- 062 de 2010 y SU – 130 de 2013), por lo que la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional de un contingente de personas con características diferentes a las dispuestas por la Corte Constitucional, pone en peligro la sostenibilidad financiera del sistema, a la par que pondría en riesgo el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

En sus alegatos, hace referencia al salvamento de voto de la sentencia SL 3537 de 2021. Finalmente, en el evento de acceder a las pretensiones de la demanda, solicitó se le ordene a las Administradoras del RAIS trasladar a Colpensiones la devolución integral de las cotizaciones efectuadas por la parte demandante, sin descuento alguno, durante la permanencia en el RAIS, precisando los conceptos a reintegrarse y un término perentorio.

### **PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO**

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en virtud del **recurso de apelación**: i) Si en el presente caso hay lugar a revocar la declaración de la ineficacia del traslado realizado al Régimen de Ahorro Individual; ii) Si hay lugar a revocar la orden dada a SKANDIA S.A. de trasladar los gastos de administración, primas de seguros y las sumas de manera indexadas.

**En el grado jurisdiccional de consulta** se deberá analizar: i) Si hay lugar a ADICIONAR la sentencia, ordenándole las sociedades PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A., a trasladar los gastos de administración constituidos por “gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes” debidamente

indexados y con cargo a sus propios recursos por el tiempo que la demandante realizó aportes a cada fondo.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición por edad, porque a la vigencia de la Ley 100 de 1993 no tenía más de 35 años de edad al haber nacido el 21 de julio de 1967 (fl. 1 del expediente digital 03); laboró para el Municipio de Peque- Antioquia, en el cargo de Personera desde el 1º de enero de 1987 al 15 de enero de 1989 y en el cargo de Inspectora de Policía desde el 8 de febrero de 1991 al 8 de mayo de 1995 sin cotizaciones al ISS, siendo la entidad responsable el Municipio de Peque según se extrae del CETIL de fl 61 del expediente digital 03; solicitó la afiliación a PROTECCIÓN S.A. el 3 de julio de 2001 (fl.37 del expediente digital 15); luego solicitó el traslado a COLFONDOS S.A. el 26 de junio de 2006 (fl. 33 y 42 del expediente digital 03) y solicitó traslado a OLD MUTUAL hoy SKANDIA S.A. siendo la fecha efectiva del traslado el 1º de enero de 2018 (fls. 47 y 48 del expediente digital 03).

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado que su afiliación a PROTECCIÓN S.A. se dio porque en el año 2001 fue a recursos humanos en el Edificio José Feliz de Restrepo, para diligenciar la documentación necesaria para posesionarse en el cargo de Oficial Mayor de un Juzgado de especialidad Penal en el Municipio de Cauca; en ese momento no estaba presente un asesor de PROTECCIÓN S.A.; no recibió asesoría de un asesor de PROTECCIÓN S.A.; reconoció la firma del formulario de afiliación del 3 de julio de 2001 y del documento anexo al formulario dijo que solo diligenció el nombre y la firma, aclaró que ese documento lo firmó en blanco; manifestó que PROTECCIÓN S.A. no le exhibió el comparativo de las mesadas pensionales y manifestó que si el valor de las mesadas pensionales hubieran estado diligenciado, ella no habría firmado un documento que de entrada le decían que su pensión iba a ser menos del 50% del régimen en el que estaba; ella no era consciente que se iba a trasladar del régimen público al régimen privado, porque cuando ella se fue a posesionar, ella era ama de casa y dentro de la documentación que le pasaron estaba ese formulario pero no le dieron asesoría y no le informaron que era para trasladarse de régimen; no leyó esos documentos antes de firmarlos; no sabía que iba a tener una cuenta de ahorro a su nombre en el régimen privado; realizó aportes voluntarios porque posteriormente se enteró porque su cuñado que trabaja en Old Mutual le dijo; se trasladó de PROTECCIÓN S.A. porque en el 2008 fue

un funcionario de COLFONDOS S.A. y le dijo que estaban mejor posesionados que PROTECCIÓN S.A.; su interés de regresar a Colpensiones es porque se siente engañada, porque al ingresar a la Rama Judicial ella no sabía que estaba firmando un traslado de régimen y no tuvo la posibilidad de elegir y ella no es especialista en derecho laboral.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

### 1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES.** Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**” (Resalto fuera del texto)

**“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES.** Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994 permite al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

*“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;....”.*

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877, 4811 de 2020, SL 1217 y 782 de 2021, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias

favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A. (fue la AFP que realizó la afiliación al Régimen de Ahorro Individual), **a pesar de haber aportado** el formulario de afiliación y **la proyección de las mesadas pensionales en ambos regímenes** en donde se indicó que la mesada pensional en el régimen anterior sería de \$697.809 y en PROTECCIÓN S.A. sería de \$336.798, no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de **afiliarse a PROTECCIÓN S.A.**, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del Régimen de Ahorro Individual, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, **adicional a lo anterior, la demandante aseguró que al momento de firmar el formulario de afiliación a PROTECCIÓN S.A. no había un asesor que le brindara información y del documento anexo al formulario de afiliación diligenció el nombre y la firma pero los demás espacios estaban en blanco**, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se violenta el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvo efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles (sentencia SL 3202 de 2021 que remite a las sentencias SL 1688 de 2019, SL 12715 de 2014, 28.479 de 2008, 39.347 de 2012 y 8397 de 1996) y no pueden ser convalidados bajo

ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PROTECCIÓN S.A. aporte el formulario de afiliación y la proyección de las mesadas pensionales en ambos regímenes, la constancia de traslado de aportes a COLFONDOS S.A., reporte estado de cuenta, historial de vinculaciones, respuesta a solicitud elevada por la demandante, documento denominado “POLÍTICAS ASESORAR PARA VINCULAR PERSONAS NATURALES”, comunicados de prensa (expediente digital 13), lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

En virtud de lo analizado en el plenario, se hace necesario precisar, que teniendo en cuenta que en el historial de vinculaciones del SIAFP no aparece la demandante afiliada al Régimen de Prima Media con anterioridad al 5 de septiembre de 1994, en este sentido, se debe entender, que al momento de realizarse la afiliación al Sistema General de Pensiones por medio de la sociedad COLFONDOS S.A., el 5 de septiembre de 1994, no se trataba de un traslado de régimen sino de una afiliación, y en esa oportunidad la AFP COLFONDOS S.A., tenía la obligación de brindar una información clara, suficiente, amplia, oportuna; información que no se brindó o por lo menos no lo acreditó.

Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse que la selección del régimen pensional de manera libre y voluntaria que exige el art 13 de la Ley 100 de 1993, se encuentra efectuado con el formulario de afiliación al sistema general de pensiones, que la demandante elevó a Colpensiones el 30 de octubre de 2020 visible a fl. 69 del expediente digital 03. Lo que genera que el traslado de los dineros de la cuenta de ahorro individual, rendimientos y demás conceptos a los que haya lugar, se deben realizar a Colpensiones, como se había indicado en primera instancia.

En relación a la aplicación de la sentencia SL 812 de 2022 en el presente evento, considera la Sala que los presupuestos facticos del caso analizado por la Corte Suprema de Justicia no se enmarcan en el caso que hoy nos convoca, toda vez que en la sentencia de la Corte se indicó:

*“Las anteriores respuestas son constitutivas de confesión, en la medida en que lo admitido por la absolvente, comporta la aceptación de hechos que perjudican la situación procesal de la promotora del juicio. En efecto, **expresó que comprendía y era consciente de las implicaciones que tenía migrar del RPM al RAIS, al punto de***

***precisar que conocía que si bien, no le era benéfico para efectos pensionales, sí en caso de fallecer, porque dejaría un sustento económico a sus descendientes.***

*De igual forma, el relato permite entrever que la **demandante tenía claro el funcionamiento del RAIS**, por cuanto sabía la importancia del bono pensional y que en el evento de morir, este podía ser sucedido a sus beneficiarios. De igual forma que conforme a lo aportado a su cuenta de ahorro individual podía acceder con mayor prontitud a una pensión, solución que no se abría paso en caso de permanecer en Colpensiones.*

*Bajo ese contexto, para la Sala es evidente que no erró el fallador plural al concluir que no hay lugar a declarar la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, por cuanto como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala Corporación, esa sanción opera únicamente cuando la afiliación del trabajador no fue libre y voluntaria (CSJ SL19447-2017).” (Resalto de la Sala)*

Y en este evento la Sra. Diana Eva López Giraldo aseguró que no fue asesorada por un funcionario de PROTECCIÓN S.A. al momento de firmar el formulario de afiliación, que los documentos se los entregaron en recursos humanos cuando se iba a posesionar en el cargo de Oficial Mayor, y que el documento anexo al formulario en donde aparece la diferencia de las mesadas pensionales solo diligenció el nombre y su firma y los demás espacios estaban en blanco.

Y frente a la oposición presentada por Colpensiones en relación a la declaración de ineficacia de la afiliación, con fundamento en el art. 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó el art. 13 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia SU 062 de 2010, la Sala no lo acogerá, toda vez que no se puede olvidar, que el análisis que se realiza en los eventos donde se solicita la ineficacia del traslado o de la afiliación, versan exclusivamente en la falta de información suficiente, amplia y oportuna por parte de los fondos de pensiones, al momento de realizarse la afiliación o el traslado de régimen, dado que esto tiene una relación directa con la validez o no del acto jurídico celebrado. Al respecto, la sentencia SL 2621 de 2021 señaló:

***“Así pues, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional, sin importar, se itera, si se tiene o no un derecho consolidado, un beneficio transicional o si se está próximo a pensionarse, **dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo (SL1688-2019).**” (Negrilla de la Sala)***



Adicionalmente no se acoge el argumento Colpensiones, porque la ineficacia del traslado puede ser declarada, aún en los eventos, en que el afiliado cuente con menos de 10 años para adquirir su derecho pensional, en vista que con esta declaratoria lo que se busca es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la afiliación o traslado al Régimen de Ahorro Individual.

Y la sentencia 3034 de 2021 señaló al respecto *“Así mismo, es un desaguizado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir SA en el año 2000, con lo cual, se desdibujó por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021).”*

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de ineficacia de la afiliación de la demandante a PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A.; así como la orden dada a SKANDIA S.A. de trasladar a Colpensiones el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante y los rendimientos; y la orden dada a PROTECCIÓN S.A. y COLFONDOS S.A. de trasladar a Colpensiones las cuotas de administración, primas previsionales y porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados.

## **2. De los efectos de la ineficacia**

Esta Sala ha sido de la posición, que los conceptos que deben ser trasladados a Colpensiones en los eventos en que se declare la ineficacia del traslado corresponde a los siguientes<sup>1</sup>:

**1º. Capital ahorrado:** Conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 y con fundamento en las sentencias SL 31.989 de

---

<sup>1</sup> Sentencia SL 3051 del 7 de julio de 2021, engloba la obligación de trasladar todos los conceptos, al señalar: “Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”

2008, SL 4964, SL 4989 de 2018, SL 1421, SL 1688, SL 1689 y SL 4360 de 2019.

**2º. Rendimientos:** En igual sentido este concepto se traslada de conformidad con el art. 113 ídem que señala *“Si el traslado se produce del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prestación Definida, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos ...”*, y tiene como sustento jurisprudencial las sentencias enunciadas en el numeral anterior.

**3º. Los gastos de administración,** encuentra su sustento normativo en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 cuando señala: *“... el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.”*, traslado que tiene sustento en lo siguiente:

**En lo que respecta a los gastos o cuotas de administración debidamente indexados,** hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 , 1689 de 2019 y SL 782 de 2021 y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al Régimen de Ahorro Individual, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de administración es manejada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; así mismo, la sentencia SL 3464 de 2019, que rememora las sentencias SL 31989 de 2008, SL 4964 y SL 4989 de 2018, SL 1421 y SL 1688 de 2019 ordena el traslado de este concepto; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la

ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

La orden que las cuotas de administración se trasladen debidamente indexadas se extrae de la sentencia SL 1688 de 2019, que dijo expresamente:

*“Está probado que la AFP accionada consignó al ISS, hoy Colpensiones, los aportes que la demandante tenía en su cuenta individual con sus rendimientos (f.º 98 a 101), sin embargo, no existe constancia de que hubiese devuelto también los valores correspondientes a **gastos de administración**, los cuales según se expuso en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019, debe asumir con cargo a sus propios recursos.*

***En tal sentido, se ordenará a la AFP accionada la devolución de esos dineros, debidamente indexados.”** (Resalto fuera del texto)*

En lo que tiene que ver con la excepción de **PRESCRIPCIÓN** de las cuotas de administración, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar.

**Y la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes**, deberán devolverse **debidamente indexada**, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3571 de 2021 se expuso en lo que nos interesa: *“... se adiciona el ordinal segundo en el sentido de condenar a Colfondos SA a trasladar, también, ... y los valores utilizados en seguros previsionales, con destino a Colpensiones, debidamente indexados, por cuanto la restitución de las cosas a su estado anterior debe ser plena o completa (CSJ SL2877-2020)”*

Conceptos que no prescriben teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL 1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del

tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar. En igual sentido, se ha pronunciado las sentencias SL 373 de 2021 y SL 4062 de 2021.

**4º. Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el traslado de estos aportes se encuentra igualmente consagrado en el art. 20 de la Ley 100 de 1993 porque al tratarse de un aporte propio del Régimen de Ahorro Individual, no encuentra un equivalente en el Régimen de Prima Media, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al Régimen de Prima Media bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016; traslado que tiene como sustento jurisprudencial la sentencia SL 2877 de 2020.

Para concluir, en sentencia reciente SL 3051 del 7 de julio de 2021, se engloba la obligación que tienen las entidades del Régimen de Ahorro Individual de trasladar los conceptos referidos anteriormente, al señalar: *“Por esto mismo, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJSL1688-2019, CSJ SL2877-2020, CSJ SL4811-2020 y CSJSL373-2021). Criterio que igualmente aplica en relación con los montos destinados a seguros previsionales y el porcentaje destinado a conformar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como se precisó en recientes sentencias (CSJ SL2209-2021 y CSJ SL2207-2021).”*

Y no sobra manifestar, que esta Corporación considera que el **principio de sostenibilidad financiera** no se violenta con la declaración de la ineficacia del traslado, porque si los efectos del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban y entre ellos, se integra la devolución en forma plena y retroactiva, con esta decisión se está protegiendo la sostenibilidad de Régimen de Prima Medía. Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2877 de 2020 se pronunció al respecto, señalando:

*“Asimismo, la decisión que se controvierte en casación tampoco lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del sistema general de pensiones, puesto*

*que los recursos que deben reintegrar los fondos privados accionados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional, con base en las reglas del régimen de prima media con prestación definida, lo que descarta la posibilidad de que se generen erogaciones no previstas.”*

En relación a la absolución de la indexación, por considerar SKANDIA S.A. que se realiza una doble condena, dado que se están trasladando los rendimientos financieros, esta Sala es de la posición que se tratan de conceptos totalmente diferentes, toda vez que los rendimientos financieros se generan por las inversiones realizadas por el fondo, en un período establecido, y dichos rendimientos pueden presentar una desvalorización en su rentabilidad en virtud de la volatilidad del mercado, lo que puede generar afectación las cuentas de ahorro individual individuales, por lo tanto, al tener derecho al traslado, éstos conceptos deberán ser actualizado al momento del pago, y así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en sus precedente jurisprudencial, tal y como son las sentencias SL 1688, SL 1689 de 2019, SL 782, SL 1187 y SL 1197 de 2021.

Teniendo claro lo anterior, considera la Sala que se deberá:

- ADICIONAR la sentencia, ORDENÁNDOLE a las sociedades PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A. a trasladar a Colpensiones los gastos de administración constituidos como anteriormente se explicó por *“gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes”* debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, en el tiempo que realizó aportes en cada uno de los fondos.

Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A. y SKANDIA S.A., por no prosperar el recurso de apelación presentado, teniendo como sustento, el artículo 365 del CGP, que establece *“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.”*

## DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: ADICIONAR** la sentencia, y **ORDENARLES** a las sociedades PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A. a trasladar a Colpensiones los gastos de administración constituidos como anteriormente se explicó por “*gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes*” debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, en el tiempo que realizó aportes en cada uno de los fondos.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás, la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

**TERCERO:** Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de PROTECCIÓN S.A. y SKANDIA S.A., por no prosperar el recurso de apelación presentado.

**CUARTO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: DIANA EVA LÓPEZ GIRALDO
DEMANDADO	: ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., COLFONDOS S.A., SKANDIA S.A. Y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-023-2020-00396-01
RADICADO INTERNO	: 043-23
DECISIÓN	: ADICIONA, ORDENA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**  
Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**  
Se desfija el 31 de marzo de 2023 a la 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**